



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA CIVIL

Medellín, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2.022)

RECUSACIÓN: 05001 22 03 000 2022 00079 00

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Auto: 038
Recusante: Parte demandante.
Recusado: JUEZ DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.
Extracto: Declara fundada recusación en el proceso radicado 05001 40
03 011 2019 00547 02.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve la recusación presentada por la apoderada de la parte demandante en el proceso radicado 05001 40 03 011 2019 00547 02, contra el JUEZ DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, el cual conoce en segunda instancia de tal trámite.

ANTECEDENTES

Previa acción declarativa de FERNANDO LEÓN PULGARÍN SALDARRIAGA contra ALCIDES VILLADA SERNA, COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A., y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., agotado el trámite procesal de primera instancia, el 19 de noviembre de 2.019 el juzgado ONCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN declaró probada la excepción denominada *“inexistencia del nexo causal”*, con la consecuencial desestimación de las pretensiones; decisión que fue apelada por activa.

El asunto en segunda instancia correspondió al JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín¹, cuyo titular fijó como fecha el 26 de octubre de 2.021 para realizar la audiencia en la que en últimas se resolvería la alzada; sin embargo, el día anterior a la diligencia, aludiendo al numeral 12 del artículo 141 del C. G. del P., la parte actora recusó al titular del juzgado, sosteniendo que previo a la audiencia en el expediente digital, verificó que se había incorporado el acta correspondiente, según la cual se confirmaría el fallo apelado, con lo que el juzgador incurre en la causal en cita, pues antes de la práctica de pruebas y escuchar alegatos, ha decidido, lo que lesiona sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

En decisión del 25 de octubre de 2.021 el titular de ese Despacho argumentó, en síntesis, que el trabajo virtual puede conllevar a situaciones como la acontecida, en la cual “*por error*” en el expediente electrónico se incorporó el formato del acta de la audiencia con su parte resolutive, la cual dijo contiene una hipótesis de decisión, pero no constituye un prejuzgamiento, pues:

“(...) dicha acta contiene lo que se puede haber concluido luego del cumplimiento del deber funcional que conlleva el estudio previo de las actuaciones a fin de tener el conocimiento suficiente para decidir en derecho, pero no es la decisión en sí misma, es un primer acercamiento, que para efectos prácticos en la labor judicial se va consignando en actas y por escrito, informales, que más adelante podrán insertarse textualmente o no, según surja del debate probatorio, en la decisión final, con la misma conclusión o con otra totalmente diferente.”

...

“... hay una posible vulneración a la reserva que se tiene sobre las decisiones judiciales antes de ser formalmente emitidas, y se dice posible vulneración, debido a que como se ha venido sosteniendo,

¹ A propósito, en cumplimiento de orden de tutela (radicado 05001 22 03 000 2020 00402 00), se decretó como prueba “*dictamen pericial de pérdida de la capacidad laboral aportado por la parte activa.*”, lo que se evacuaría con comparecencia del perito en la audiencia de sustentación y fallo.

se trata de una mera hipótesis de decisión que el debate probatorio habrá de confirmar o no ...". (sic).

Por lo anterior, consideró configurada la causal achacada, sobre todo porque existe duda de la recusante en relación a la igualdad efectiva de las partes, por lo que para garantizarla (así como la transparencia e la imparcialidad en la administración de justicia), decidió separarse del conocimiento del asunto, disponiendo el envío de las diligencias al JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO de Medellín.

Esta última autoridad judicial se pronunció en proveído del 9 de febrero de 2.022, indicando que no todas las manifestaciones del juez dan lugar a la separación del asunto que por ley le corresponde decidir, siendo que la causal señalada exige que el fallador exprese fuera del trámite opinión directa y específica sobre el contenido de la decisión.

Entonces, que la inserción del acta de fallo fue un error secretarial de quien tenía a su cargo el estudio del expediente, sin que constituya el sentido del fallo ni corresponda al criterio del Juez, quien a propósito manifestó del acta que *“contenía una hipótesis de decisión, la misma no constituye precisamente un prejuzgamiento”*, además, ese documento no está suscrito por él.

Por lo anterior, más allá que se quiera garantizar la tranquilidad de las partes, declaró no configurada la causal de recusación invocada, ordenando la remisión de las diligencias a esta Corporación en los términos del artículo 140 del C. G. del P., lo que se procede a resolver en virtud del artículo 143 ibídem, previas:

CONSIDERACIONES

La teleología de la recusación –así como de los impedimentos-, es la de dotar a la actuación judicial de las garantías de imparcialidad e igualdad para las partes (artículos 13 Constitución Nacional y 4º del C. G. del P.), buscando que los asuntos sean resueltos de manera objetiva, *“sin preconcepciones fácticas ni jurídicas que condicionen el criterio del fallador por haberlo exteriorizado con antelación...”*².

Para proteger esas prerrogativas como objetivos superiores de las actuaciones judiciales se han instituido las causales consagradas en el artículo 141 del C. G. del P., por lo que el funcionario no está autorizado para abstenerse de juzgar con fundamento en hechos que no configuran ninguno de los eventos establecidos en la citada norma, ahí rige el principio de la taxatividad, punto sobre el cual la Corte Suprema de Justicia, así como la Corte Constitucional se han pronunciado³.

La causal que soporta la recusación objeto de análisis es la contenida en el numeral 12 del artículo 141 del C. G. del P., la cual reza:

² Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, providencia AC537 de 2.022.

³ La Corte Suprema de Justicia indicó: *“«[E]n esta materia rige el principio de taxatividad, según el cual sólo constituye motivo de excusa o de recusación, aquel que de manera expresa esté señalado en la ley, por tanto, a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales, mientras que a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio a su juzgador, de modo que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial, no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía en punto de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez».* (CSJ AP2618 de 2015, rad. n° 45.985; criterio reiterado en CSJ AC5368-2019, 11 dic).” Ídem.

Por su parte, la Corte Constitucional señaló: *“... Las normas que consagran las causales de impedimento y recusación, se han dictado, precisamente, para garantizar la imparcialidad del juez. El que existan las causales, fijadas por la ley y no por el capricho de las partes, garantiza, dentro de lo posible, la imparcialidad del juez y su independencia de toda presión, es decir, que sólo esté sometido al imperio de la ley”.* Sentencia C 538 de 2.016.”. Igualmente, desde antes la misma Corte había expresado: *“Los impedimentos constituyen un mecanismo procedimental dirigido a la protección de los principios esenciales de la administración de justicia: la independencia e imparcialidad del juez, que se traducen así mismo en un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues una de las esferas esenciales del debido proceso, es la posibilidad del ciudadano de acudir ante un funcionario imparcial para resolver sus controversias. (artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con diversas disposiciones contenidas en instrumentos de derechos humanos, tales como los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).”* Sentencia C- 881 de 2.011.

“12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.”

Sobre esa causal la jurisprudencia ha dicho:

“(...) Ese concepto o consejo debe ser rendido fuera de actuación judicial, es decir, no brota del interior del proceso, sino que se caracteriza por haber sido rendido en forma extrajudicial, comunicado y otorgado fuera de las funciones jurisdiccionales o de la faena de juzgamiento, no dentro del proceso ni el plasmado en una misma instancia al proferir un auto o una sentencia, porque a diferencia del consejo o del concepto extrajudicial, cuando el juez enfrenta la solución de un problema jurídico en un proceso determinado, viste la toga de administrar justicia por delegación y materialización genuina de la soberanía del propio Estado para resolver un conflicto, como reflejo de una auténtica tarea democrática que hace de puente entre los poderes públicos y la ciudadanía. (CSJ AC de 18 dic. 2013, rad. 2010-01284-00).”. Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia AC3526-2.019.

En el correspondiente expediente digital se encuentra el documento que sirve de base para la recusación denominado **“ACTA AUDIENCIA SEGUNDA INSTANCIA 2019 574”**, en el que sin realizarse la audiencia prevista para el 26 de octubre de 2.021, quedó plasmado y se publicó, lo siguiente:

“Sentencia N°.

*“En armonía con los anteriores planteamientos **EL JUZGADO DOCE CIVIL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN**, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución,*

“FALLA:

*“**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de contenido, fecha y procedencia indicada en la parte motiva de este fallo proferido en primera instancia por el Juzgado 11 Civil Municipal de Oralidad de Medellín.*

*“**SEGUNDO:** Se condena en costas al demandado apelante. Como agencias en derecho se fija la suma de UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE.*

*“**TERCERO:** Devuélvase el expediente a su Juzgado de origen,*

después de cumplidas las anotaciones de rigor.

***“JULIO CESAR GOMEZ MEJIA
“JUEZ”***

Adicionalmente está la fecha y hora en que supuestamente se realizó la diligencia en la cual se evacuaría la prueba pericial, alegatos y fallo de segunda instancia; ídem se ve el nombre de las partes, sus apoderados y las respectivas identificaciones, y la parte resolutive la cual aparece confirmando la decisión de primera instancia.

Por lo anterior se pregunta la Sala de cara a resolver la situación; ¿la publicación de un documento antes de realizarse la correspondiente audiencia, que indica el fallo configura la causal regulada en el artículo 141.12 del C. G. del P., generando que el juez deba apartarse del procedimiento?

Para comenzar a responder lo anterior ha de decirse que del artículo 21 de la ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996), el juzgado es *“la célula básica de la organización”*, el cual independientemente de su categoría o especialidad está integrado por *“el juez titular, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y por el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura.”*, es decir, que el Director del Despacho en principio no puede considerarse al margen de las comunicaciones jurisdiccionales que se brinden, como es el caso de las que se hacen en la página web de la Rama Judicial.

Si ello es así, difícil creer la teoría del juez recusado que lo que se publicó como si se tratara de una sentencia, apenas es una hipótesis. No, ello es evadir su responsabilidad, se insiste, del Director del Despacho quien con los demás servidores integra la unidad judicial, que con la cuestionada comunicación estaba anunciando la decisión

de fondo, independientemente de argumentaciones que se presentaran y pruebas que se recaudaran.

Ahora, la publicación de un acta que informa una decisión por lo menos constituye conceptuar por fuera de la actuación judicial, pues la correspondiente diligencia (audiencia) no se había surtido. Que se publicara institucionalmente dentro de la información propia del proceso, de lo que no existe duda, es otra cosa, y es lo que precisamente hace que se configure la recusación achacada.

La ausencia de firma de por sí no le quitaba peso a esa “*hipótesis*”, en la medida que es algo que prevé el mismo ordenamiento procesal en su artículo 325 visto en armonía con el artículo 107 *ibídem*. El usuario o destinatario, previo agotamiento del juicio, espera la decisión judicial en el momento procesal que corresponde, no las cavilaciones de quien está llamado a resolver el asunto que prescinde de las pruebas que estaban llamadas a ser recaudadas.

Valga anotar que el concepto de “*Acta*” significa “*Relación escrita de lo sucedido*”⁴, siendo un documento que surge con posterioridad a la diligencia judicial y el cual recoge lo actuado, por lo que si se dio con antelación anotándose la decisión, es un concepto que deja en entredicho la imparcialidad del juzgador.

Como conclusión, el Juez recusado antes de evacuar las probanzas y escuchar a las partes, dejó ver el sentido decisorio, lo que genera incertidumbre y rompe el valor fundamental de la imparcialidad, transgrediéndose de paso el deber dispuesto en el artículo 42.9 Procesal, que dispone que el juez debe “*Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos. (...)*”.

⁴ Real Academia Española. Diccionario Real Academia Española, Edición Tricentenario.

Finalmente, el inciso 1° del artículo 144 del C. G. del P., señala que:

“El juez que deba separarse del conocimiento por impedimento o recusación será reemplazado por el del mismo ramo y categoría que le siga en turno atendiendo el orden numérico, y a falta de este por el juez de igual categoría, promiscuo o de otra especialidad que determine la corporación respectiva.”.

En razón a citada norma, le corresponde asumir el conocimiento del asunto al JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, quien sigue en turno del mismo ramo y categoría.

Por lo expuesto, el Tribunal;

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA LA RECUSACIÓN formulada en contra del doctor JULIO CESAR GÓMEZ MEJÍA, en su condición de JUEZ DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín, según la causal advertida y en los términos aquí expuestos.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, envíese el expediente al JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín para que dicho Despacho siga conociendo del asunto, tal como se expuso.

Notifíquese;



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO